



**E**

Editorial

## Transparencia que llega tarde

**El error en las cifras de captura de merluza común presentadas al Congreso deja entredicho la prolijidad del Ejecutivo.**

Cuando se discute una ley tan sensible como el fraccionamiento pesquero, cualquier error técnico puede transformarse en una grieta política. Eso ocurrió la semana pasada cuando el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció que las cifras sobre la captura de merluza común entregadas por el subsecretario Julio Salas en la comisión mixta eran incorrectas. Aunque la Subsecretaría de Pesca explicó que los datos estaban desactualizados —correspondían solo al periodo enero-septiembre de 2024—, el daño ya estaba hecho.

No se trata simplemente de un desfase estadístico. El verdadero problema es político: se expuso al Congreso a discutir y votar un proyecto de ley con información incompleta. Por más que Subpesca haya señalado que toda la información utilizada fue pública y basada en registros oficiales

**La pesca artesanal e industrial son sectores históricamente en tensión, y cualquier señal de opacidad o error técnico puede alimentar sospechas de favoritismo o negligencia.**

sada en registros oficiales de Sernapesca, eso no exime la responsabilidad de haber presentado un cuadro fuera de contexto justo en una sesión clave.

La legitimidad de una ley no depende solo del número de votos que consiga. El fraccionamiento pesquero fue aprobado con amplio respaldo —111 votos en la Cámara y 40 en el Senado—, pero eso no borra el hecho de que se discutió con información incorrecta. Y esa falla siempre genera dudas tanto en la transparencia del Ejecutivo como en la calidad del debate legislativo.

En temas de sustentabilidad y recursos naturales, la precisión no es un lujo: es una obligación. La pesca artesanal e industrial son sectores históricamente en tensión, y cualquier señal de opacidad o error técnico puede alimentar sospechas de favoritismo o negligencia. La confianza se construye con datos correctos y oportunos, no con comunicados aclaratorios posteriores.

Más que defenderse con tecnicismos, la autoridad debe asumir que, cuando se gobierna, los errores informativos también son errores políticos.